

Guatemala - Pobreza, violencia, corrupción... y también elecciones

Por: [Victoria Korn](#)

Globalización, 16 de agosto 2023

[Rebelión/CLAE](#) 16 August, 2023

Región: [América Latina, Caribe](#)

Tema: [Democracia, Política](#)

El próximo domingo 20 de agosto, 9,4 millones de guatemaltecas y guatemaltecos, en medio de la pobreza, la violencia y la corrupción, definirán quién presidirá el país los próximos cuatro años en una segunda vuelta electoral entre la conservadora Sandra Torres, que sacó un 15,7% de los votos en la primera ronda, y Bernardo Arévalo, hijo del expresidente Juan José Arévalo, que logró el segundo lugar con el 11,8%.

El camino a la segunda ronda introdujo permanentes arremetidas desde el Poder Judicial para intentar inhabilitar al Movimiento Semilla (de Arévalo), de fuerte discurso anticorrupción, en un país donde el 48 por ciento de los niños sufre desnutrición crónica. Ningún candidato obtuvo la mayoría absoluta en primera vuelta, por lo que se realizará un balotaje el 20 de agosto entre Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla y Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

El binomio presidencial de Semilla denunció a escasos días de las elecciones una “sucía” campaña de desinformación en su contra. “Ya basta de desinformación. Estamos viendo una campaña que no solo es sucia, sino que tiene como principal vocera a una candidata presidencial”, señaló el presidenciable ante contenidos que han sido difundidos en diferentes formatos digitales, así como “insultos que la candidata Torres esparce en sus mítines”.

“Es impresentable que Sandra Torres sea el principal rostro de las mentiras, de la desinformación y de los mensajes de odio que hoy estamos viendo”, expresó Arévalo y añadió que se trata de “un daño directo y dirigido al desarrollo libre del proceso electoral (...). Busca estafarlos para que voten por miedo o por información que no es verídica”.

“Los de Semilla, todos son unos afeminados y una partida de huecos. En la UNE hay hombres y mujeres definidas, aquí no hay medias tintas”, fue parte del mensaje de Torres en un mitin político en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.

La mayor organización de veteranos militares de Guatemala -muchos de ellos parte del genocidio- respaldó a cinco días de las elecciones a Sandra Torres, después de haber luchado en su contra durante sus dos primeras candidaturas, lo que muestra hasta qué punto el sorprendente avance de su oponente ha sacudido la política del país.

El envío de los militares fue aprovechado por Torres, quien criticó a Arévalo por no conocer realmente a su país debido a que nació en Uruguay cuando su padre, el ex

presidente Juan José Arévalo, estuvo en exilio tras el derrocamiento de su sucesor Jacobo Arbenz, en golpe respaldado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

“Hoy más que nunca Guatemala está en peligro”, advirtió Torres; y agregó que Arévalo disolvería al ejército, legalizaría el matrimonio entre personas del mismo sexo y expropiaría propiedad privada. “No queremos comunismo”, añadió. La amenaza funcionó entre los veteranos presentes, quienes aplaudieron.

Pacto de corruptos

En Guatemala, a los amigos del chanchullo también se les conoce como Pacto de Corruptos. Es decir, se trata de una alianza entre gente que ha hecho de la política un medio para estar en el lugar apropiado desde donde lucrar. Bien situados, estratégicamente colocados, hacen o acrecientan capitales a los que bien se les puede llamar botín, señala Rafael Cuevas.

La red mafiosa que constituye los amigos del chanchullo también quiere hacer mutis por el foro y se consideran injustamente perseguidos porque se les pide cuentas de crímenes que cometieron durante los más de 36 años de enfrentamiento armado en el país. Empezando por firmitas como el general Efraín Ríos Montt, genocida que, sin inmutarse, oyó en el juicio que se le siguió en los tribunales de justicia los testimonios de decenas de sobrevivientes de las masacres que se cometieron en el país cuando gobernó con pasión mesiánica, añade.

El Pacto de Corruptos pasa momentos de apremio, al no haber calculado que un contrincante no deseado, que amenaza con destramar la red de apoyo mafioso que ha construido, llegaría a la segunda ronda de las elecciones presidenciales, sus flancos más débiles se desmoronan y las ratas empiezan a huir despavoridas. En el ámbito internacional es tan grande su descrédito que han dejado de ser útiles para los poderosos de adentro y de fuera del país.

Con el control del sistema de justicia, incluida la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público, la coalición gobernante activó, después de la primera vuelta electoral, una estrategia para bloquear judicialmente al Movimiento Semilla.

Lo que vendrá

En la próxima semana el futuro de la democracia guatemalteca y del país se dirimirá en varios campos: el judicial, el electoral y en las plazas y calles. El papel de la ciudadanía será crítico y, una vez más, del pueblo dependerá la posibilidad de una nueva primavera para Guatemala, señala el antropólogo y politólogo Ricardo Sáenz de Quejada

“Berny” Arévalo tiene una ventaja de 15 puntos en la intención de voto, 43 por ciento por 28 de su rival, la candidata del partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE) Sandra Torres, en una encuesta de la Fundación Libertad y Desarrollo y Cid-Gallup, en la cual 22 por ciento respondieron que no apoyará a ninguno de los dos y siete de cada 100 anularán su voto.

El temor es cómo va a gobernar Arévalo si tiene a todas las fuerzas de la derecha corrupta aliadas en su contra. Una semana antes de los comicios, una abogada de la UNE transmitió -según un video que circula viralmente- una orden durante una sesión de capacitaciones de observadores del partido en las mesas electorales: “Es una directriz sí o sí: se van a impugnar todas las mesas electorales”.

Antes de las elecciones hubo un operativo de Estado para negar el registro al Movimiento

para la Liberación de los Pueblos (MLP) y su candidata, Thelma Cabrera, una campesina activista por los derechos a la tierra, el acceso a la energía eléctrica y contra la privatización de los servicios básicos. Pese a que 22 personas contendieron por la presidencia y de que más de 40 por ciento de los habitantes del país son indígenas, Cabrera era la única aspirante perteneciente a alguno de los pueblos originarios: prueba del racismo y carencia de representatividad del sistema político.

Todo comenzó cuando se anunciaron los resultados de la primera vuelta de las elecciones, celebrada el 25 de junio. Sandra Torres, que fue primera dama durante el gobierno de Álvaro Colom (2008-11) obtuvo un 15% de los votos y Bernardo Arévalo, hijo del histórico presidente Juan José Arévalo (1945-51), del Movimiento Semilla un 12%.

El candidato presidencial de Semilla tildó la suspensión del partido de «golpe de Estado técnico...una acción desesperada de grupo político criminal que se da cuenta que tiene los días contados en términos del control sobre el poder político».

El avance a segunda vuelta de Arévalo, sociólogo y exdiplomático de 64 años, fue toda una sorpresa, ya que las encuestas previas le daban menos de un 5% de los votos. Su estandarte es la lucha contra la corrupción en las instituciones, un mal endémico que se ha ido agravando en los últimos años,

De tener “uno de los mecanismos más exitosos para combatir la corrupción y el crimen organizado” a que el sistema de justicia se haya convertido “en un brazo represivo para asfixiar a quienes buscan decir la verdad, investigan y promueven la libertad de expresión”.

Con ambas declaraciones sobre Guatemala –la primera se refiere a la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) de la ONU, que fue expulsada en 2019– la Oficina Humanitaria de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) describió la evolución vivida en los últimos años por el país centroamericano.

A partir del fin de la Cicig, el Ministerio Público se convirtió en un instrumento para defender al presidente de turno (Morales primero, y Alejandro Giammattei desde 2019) y perseguir a quienes no fueran afines a sus ideas. Y fueron sus investigaciones a las altas esferas de poder y las élites empresariales, las que determinaron su despido.

Esta tendencia desembocó en una creciente criminalización de jueces y medios de comunicación independientes. Así, cerca de 40 operadores de justicia que trabajaban en casos relacionados con corrupción y una veintena de periodistas que los investigaban acabaron detenidos o bien eligieron salir de Guatemala para evitar la cárcel.

Denuncian ser víctimas de una campaña para silenciar voces críticas contra el actual gobierno y cualquier investigación que pudiera salpicar sus intereses. “En Guatemala existe un proyecto autoritario encaminado a destruir la democracia”, condenó la organización Human Rights Watch (HRW) en una visita realizada al país en abril.

Aunque se refirió en pocas ocasiones a estas acusaciones, el presidente Alejandro Giammattei sí las rechazó tajantemente el año pasado cuando un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó a Guatemala entre los países que vulneran los derechos humanos.

El mandatario negó que exista “un ejercicio abusivo del poder” ni “una infracción sistemática de la independencia del poder judicial, y mucho menos actos de insubordinación

de las instituciones del Estado”, tal y como señaló el organismo internacional.

También criticó que el informe cuestionara los procesos en curso contra fiscales y jueces que, en su opinión, “abusaron de su poder en el fuero interno y violaron el debido proceso (...). Cuestionar estas investigaciones socava nuestra institucionalidad”, denunció.

“Todas estas decisiones controversiales, el alto nivel de judicialización de la política y la persecución a candidatos y operadores de justicia hacen que, a pocos días de votar, el ambiente aquí esté bastante enrarecido y oscuro”, describe el analista guatemalteco Renzo Rosal.

“No se respira un aire de fiesta ni euforia como otras elecciones. Esta vez están marcadas por la regresión de la democracia, que en Guatemala nunca ha llegado a estar consolidada, y por un fortalecimiento autoritario”, agrega.

Juan Francisco Sandoval, quien estuvo al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, tiene muy claro que el parteaguas de esta situación fue la expulsión de la Cigic hace cuatro años.

“El hecho de que en algunas investigaciones se descubriera cómo la élite política era usuaria del sistema corrupto y financió ilícitamente la campaña política del anterior presidente (Jimmy Morales, quien ordenó la salida de la comisión) marcó el inicio del fin”, le dijo Sandoval a BBC Mundo desde Estados Unidos, donde vive después de que fuera destituido de su cargo en 2021.

Sandoval conoce bien el funcionamiento de la Cigic, el grupo de Naciones Unidas que apoyó al Ministerio Público en el que él trabajó durante más de 15 años y con el que se llevaron a cabo algunas de las investigaciones anticorrupción más sonadas del país, como la que acabó con el expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta en la cárcel.

Hay un nombre que se repite al hablar de la mayoría de estos casos de jueces y periodistas criminalizados es el de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras. En el cargo desde 2018, le atribuyen liderar una campaña de persecución en su contra, e incluso Estados Unidos la incluyó en una lista de actores “corruptos y antidemocráticos” por obstaculizar la justicia.

Sandoval asegura que “Su dedicación completa fue obstruir las investigaciones que ya habíamos adelantado. Y sobre las denuncias que recibíamos que podían involucrar al presidente y su círculo cercano, decidía que las deriváramos a otras fiscalías con el ánimo de que las investigaciones no avanzaran”.

La prensa independiente fue otro de los objetivos. El caso con mayor repercusión fue la reciente condena a seis años de cárcel por lavado de dinero de José Rubén Zamora, uno de los mayores exponentes del periodismo de investigación en el país y fundador del emblemático medio elPeriódico.

Juan Luis Font, quien fue director de dicho rotativo, señaló que «El actual gobierno tiene cooptadas todas las instituciones que juegan un rol en el sistema de justicia y en el sistema de control frente al Estado».

Sembrando Semilla

Aunque la prensa hegemónica suele caracterizar al Movimiento Semilla como una agrupación de profesionales y académicos liberales, fue durante las protestas masivas de 2015 (para exigir juicio al ex presidente Otto Pérez Molina) y 2017 (de protesta en contra de la expulsión de la Cicig) que se convirtió en un movimiento que cataliza todo el descontento popular. En un principio no le obstaculizaron la candidatura porque pens

En las elecciones de 2018 Semilla intentó llevar de candidata a la presidencia a Thelma Aldana (ex presidenta del organismo Judicial y de la Suprema Corte de Justicia), pero su candidatura no fue aceptada y por el contrario se dictó una orden de aprehensión por razones reservadas.

Como fiscal general, junto con la Cicig, abrió investigaciones de graves casos de corrupción que a la fecha tienen en prisión a Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti. También inició un proceso para retirar el fuero al expresidente Jimmy Morales, que no prosperó. Ella también está exiliada en Washington.

“Yo lo traté en el contexto de la negociación de los acuerdos de paz en los 90. Estuvo un tiempo en Ginebra, en Interpeace, y su especialidad era la justicia transicional y un ejército para tiempos de paz. Desarrolló ideas para acercar al ejército con la sociedad civil en un modelo de transición para después del conflicto armado que, por supuesto, nunca se aceptó, señala la estadounidense Helen Mack Chang, defensora de derechos humanos, en entrevista con La Jornada de México.

“Los militares sólo querían hablar de modernización del ejército, nunca de reformar la doctrina militar (...) Los fantasmas de tiempos de la guerra reviven en la mente de la gente. Los que parecían los favoritos se fueron hasta el cuarto, quinto lugar. La señal es clara: este pueblo ya no quiere a los mismos de siempre”, añadió Mack Chang.

Las propuestas de Arévalo

Bernardo Arévalo anunció que una de sus metas principales es la lucha contra la corrupción, que como en muchos de nuestros países, es un problema estructural de toda la vida. Voy a concentrar mis acciones de corto plazo en cuatro ejes fundamentales: salvar a Guatemala de la corrupción, rescatar la economía, construir un gobierno presente y frenar la delincuencia, señaló.

El programa sería puesto en práctica en los primeros 100 días de su gestión si triunfa en los comicios y asume su mandato el 14 de enero del próximo año. Son 100 días de efecto inmediato, en donde se busca obtener logros de corto plazo, que simbolicen la determinación del gobierno en intentar hacer funcionar las instituciones, subrayó.

La corrupción es un cáncer que se ha incrustado en la mayoría de instituciones públicas, y su gobierno denunciará los casos, nombrará funcionarios honestos y capaces y creará un gabinete anticorrupción. “Pondré el ejemplo, ya que reduciré el salario que tiene el puesto de presidente de la república y se revisarán las remuneraciones de los funcionarios de alto nivel para eliminar privilegios injustificados”, afirmó.

En cuanto al eje de rescate de la economía, anunció ocho medidas, entre ellas apoyo a la producción agrícola, un fondo nacional para la innovación y transformación productiva, formación para el empleo, rebaja de los precios de la electricidad y un sistema para el abastecimiento de medicinas a bajo costo.

Para construir un gobierno que sí esté presente, Arévalo propuso cuatro medidas; la primera de ellas es la revisión de los altos salarios de los funcionarios gubernamentales y eliminar la práctica de hacer de la política un negocio, además de programas para viviendas dignas, de vacunación y manejo de recursos hídricos y bosques.

Con relación a la lucha contra la delincuencia, Arévalo enfatizó que frenará las extorsiones desde las cárceles, reordenará el sistema penitenciario e impulsará el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, entre otras medidas.

El binomio presidencial del partido Movimiento Semilla, conformado por Arévalo y Karin Herrera, presentó un plan de 10 medidas en contra de la corrupción, que incluye la conformación de un gabinete específico anticorrupción, y comisiones, así como reformas a varias leyes, entre ellas el Código Penal para dar “muerte civil” a las personas condenadas en casos de corrupción.

Como tercer punto, proponen un nuevo Plan Nacional de Gobierno Abierto, que promueva la transparencia; cuarto, un paquete de reformas a las leyes de Probidad, Contrataciones del Estado, la Contraloría General de Cuentas, Acceso a la Información y Servicio Civil, Electoral y de Partidos Políticos y contra el Lavado de Dinero y otros activos.

La Limpieza de Plazas Fantasma es el quinto punto, dirigido a identificar y denunciar los puestos asociados al clientelismo político en el Organismo Ejecutivo y sus dependencias. También la limpieza de contratos derrochadores, la recuperación de puertos, una política antisobornos, municipalidades transparentes y la muerte civil que propone una reforma al Código Penal contra personas condenadas en casos de corrupción.

Arévalo aclaró que es la inhabilitación de una persona para ocupar cargos públicos y de sostener negocios con el Estado cuando sean halladas culpables de corrupción. El presidenciable indicó que se asesorarán de expertos para aplicar estas medidas.

Según una encuesta publicada por la Fundación Libertad y Desarrollo, la corrupción es considerada como el segundo problema del país que más afecta con un 18 %, incluso antes que el alto costo de la vida, que tiene un 15 %. Los resultados de la encuesta señalan que el primer problema identificado por los guatemaltecos es la falta de empleo.

Victoria Korn

Victoria Korn: *Periodista venezolana, analista de temas de Centroamérica y el Caribe, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la).*

La fuente original de este artículo es [Rebelión/CLAE](#)

Derechos de autor © [Victoria Korn](#), [Rebelión/CLAE](#), 2023

[Comentario sobre artículos de Globalización en nuestra página de Facebook](#)
[Conviértase en miembro de Globalización](#)

Artículos de: **[Victoria Korn](#)**

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). The Centre for Research on Globalization will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. The Center of Research on Globalization grants

permission to cross-post original Global Research articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Global Research articles in print or other forms including commercial internet sites, contact: publications@globalresearch.ca

www.globalresearch.ca contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

For media inquiries: publications@globalresearch.ca